

INMIGRACIÓN Y DIVERSIDAD ÉTNICA, RETOS CLAVE PARA LA SOCIALDEMOCRACIA

FRANCISCO JAVIER MORENO FUENTES
(IPP-CSIC)

Los partidos socialdemócratas europeos han experimentado un significativo deterioro de sus resultados electorales a lo largo de la última década. Pese a los matices que esta afirmación requiere, a la hora de conceptualizar la situación específica de cada país, la tendencia general apunta a una pérdida sustancial de apoyos entre votantes de clase media y trabajadora, la base electoral tradicional de estos partidos. El análisis de esta tendencia requiere tomar en consideración una pluralidad de dimensiones, varias de las cuales aparecen directa o indirectamente relacionadas con la migración internacional y los efectos de la misma percibidos por algunos sectores de la población de las sociedades receptoras.

Como desarrollaremos en las siguientes páginas, estas cuestiones interpelan directamente al marco cognitivo y al sistema de valores socialdemócratas, situando el fenómeno migratorio en una posición central en la reflexión acerca del futuro de la socialdemocracia en Europa.¹

“Globalización” y flujos migratorios

Una de las principales víctimas de la crisis económica iniciada en 2007 en EEUU y que

llegó a cuestionar la propia existencia de la zona Euro, ha sido la visión positiva de la globalización, que en buena medida había prevalecido hasta ese momento en el mundo desarrollado. La idea de que la apertura de los mercados a la libre circulación de bienes, servicios y capitales funciona como un juego de suma positiva, beneficiando tanto a los países en desarrollo como al mundo desarrollado, ha sido gradualmente sustituida por la percepción de que el sistema económico global funciona como un juego de suma cero en el que las sociedades occidentales han de competir con los países en desarrollo tanto por los mercados para sus productos y servicios (con el riesgo de enfrentarse a situaciones de *dumping* social y medioambiental), como por los insumos básicos para sus sociedades y sistemas productivos (materias primas, energía, alimentos, etc.). Esta transformación en la percepción de la globalización ha desestabilizado a los partidos socialdemócratas europeos que, a partir la década de los 80, habían abrazado el libre comercio y promovido la visión positiva de la integración de los mercados globales.

La crisis del empleo sufrida por las sociedades desarrolladas, en buena medida con-

secuencia de lo que se ha venido en llamar la “cuarta revolución industrial”, ha contribuido a reforzar la percepción de que nos encontramos ante una “nueva normalidad”, reflejo del nuevo equilibrio en la producción y distribución de riqueza a nivel global. El traslado de un número creciente de empleos (inicialmente puestos de trabajo de baja cualificación vinculados a las manufacturas, pero cada vez más también de otras tareas de mayor valor añadido) a países con menores costes de producción ha reforzado esta visión del empleo como un recurso escaso más.

La libre circulación de personas (el cuarto elemento que, en teoría, hubiese debido completar el modelo de la globalización liberal), nunca fue, de hecho, política e institucionalmente reconocida como un elemento deseable por los gobiernos de los países desarrollados. Pese a esto, los importantes movimientos de población que se produjeron como efecto secundario de la creciente internacionalización de las economías (con millones de trabajadores inmigrantes llegados a Europa para ocupar los nichos de empleo no deseados por los trabajadores autóctonos), convirtieron a las poblaciones de origen inmigrante en uno de los efectos más visibles de la creciente integración de los mercados europeos en la economía global, situando con ello al fenómeno de la inmigración en un lugar prominente de la agenda pública y finalmente política de estas sociedades.

Los partidos socialdemócratas europeos, conscientes del impacto positivo que la inmigración tiene sobre la economía de los países receptores, han tendido a mantener una actitud favorable hacia dichos flujos (siempre desde una lógica utilitarista que promovía el control de los mismos en beneficio de la so-

ciedad y del sistema productivo del país de acogida), al tiempo que situaban la garantía de derechos para las poblaciones de origen inmigrante en un lugar más prominente de sus programas que otras formaciones políticas. En esta coyuntura, las actitudes de creciente rechazo hacia la inmigración entre determinados sectores de la población autóctona han supuesto un mayor coste en términos de apoyo electoral para estos partidos.

La llamada “crisis de los refugiados”, experimentada en los últimos años, aunque de una naturaleza esencialmente distinta (vinculada a la desestabilización de una serie de países en la periferia de la zona de influencia europea), comparte importantes aspectos con los flujos migratorios clásicos, y ha hecho aún más evidente la creciente interconexión de las sociedades contemporáneas a nivel global, visibilizando las crecientes dificultades experimentadas por los Estados-nación europeos para controlar de manera efectiva sus fronteras (Castles, 2004).

Aquí, de nuevo, los partidos socialdemócratas se han visto particularmente interpelados, al tener que responder a las demandas de crecientes sectores de las poblaciones autóctonas que, desde una lógica del “sentido común”, muestran de forma cada vez más asertiva su renuencia hacia la presencia de extranjeros por los supuestos impactos negativos derivados de la misma, independientemente de la falta de evidencia empírica que valide dichas percepciones (Peri, 2014; Dustmann y Frattini, 2013; Rutter y Latorre, 2009). La disyuntiva estriba aquí en cómo responder a dichas actitudes negativas hacia la inmigración, sin traicionar elementos básicos del programa socialdemócrata, fundamentado tanto en la creencia en los aspectos

positivos que para las sociedades de acogida tiene la inmigración, como en el apoyo a principios y valores humanitarios que postulan el derecho de las personas a huir de la guerra, la persecución, o la pobreza y la obligación ética de las democracias liberales de acoger y proteger a estas personas y de ofrecerles un espacio en el que desarrollar sus vidas de forma plena.

De este modo, los partidos socialdemócratas han visto tensionadas algunas de las premisas básicas sobre las que se construían los apoyos de determinados sectores de la población, crecientemente hostiles tanto a la globalización de la economía, como a la llegada de inmigrantes y refugiados.

Diversidad étnica e “integración” de poblaciones de origen inmigrante

Desde la segunda mitad del siglo pasado, las sociedades europeas abordaron de manera claramente diferenciada los retos derivados de una creciente diversidad étnica consecuencia del asentamiento de poblaciones de origen inmigrante. Siguiendo sus propias experiencias históricas de gestión de la diversidad interna, vinculadas a su constitución como Estados-nación, los diferentes enfoques aplicados por los países europeos pueden situarse en un continuo de modelos típico-ideales que iría desde la “asimilación”, hasta el “multiculturalismo”. Así, en un extremo, el paradigma “asimilacionista” entendía que el logro de la igualdad de derechos y oportunidades de la población extranjera debería estar condicionado a su adaptación cultural y aceptación de los principios y prácticas normativas de la sociedad receptora. El resultado final de este proceso debería ser el mayor grado posible de homo-

geneidad cultural de la comunidad nacional, estructurada en torno a la cosmovisión y los valores de la sociedad receptora. El modelo “multiculturalista”, por el contrario, aspiraba a que los inmigrantes se incorporasen a la sociedad receptora (fundamentalmente a través de su inclusión en el mercado de trabajo, la vivienda, el sistema educativo, etc.) en condiciones de igualdad de derechos y oportunidades con la población autóctona, sin que esto supusiese que para ello debieran renunciar a su propia identidad (cultural, religiosa, lingüística, etc.), ni a las prácticas y costumbres de su comunidad de origen. El resultado final de este proceso debería ser una sociedad plural en términos culturales y étnicos, en la que las distintas comunidades coexistiesen formando una sociedad diversa.

Ambos modelos ideales presentaban importantes contradicciones que se pueden resumir en la llamada “paradoja del reconocimiento” (De Zwart, 2005). Según este planteamiento, tanto la estrategia de reconocer las identidades culturales y étnicas de ciertos grupos, como la de negarse de plano a hacerlo, conllevaría repercusiones negativas para el objetivo último de dichas políticas, la “integración” de la población de origen inmigrante. Aunque representen modelos abstractos (Bertosi et al., 2012), siempre modificados por las prácticas reales aplicadas sobre el terreno, esas “filosofías de integración” (Favell, 1998) han ejercido una influencia muy real sobre las políticas públicas, y de modo especial sobre las visiones compartidas por las sociedades de acogida acerca de lo que constituiría una “integración” exitosa.

En Francia, país que representa el modelo “asimilacionista” por antonomasia, tam-

bién llamado modelo “republicano”, existe constancia de que una parte significativa de las poblaciones de origen inmigrante se encuentran en una situación particularmente vulnerable en términos de su integración socioeconómica. Aunque con frecuencia se ha señalado a la existencia de barreras culturales y lingüísticas para explicar los peores resultados de la “primera generación” de inmigrantes, lógicamente estos factores no funcionan a la hora de dar cuenta de los pobres resultados de los grupos ya nacidos y socializados en Francia (lo que comúnmente se denomina “segundas”, e incluso “terceras”, generaciones) (Wieviorka, 2009). La carencia de instrumentos estadísticos adecuados, para medir con precisión la magnitud de dichas desigualdades, consecuencia de los obstáculos planteados por el modelo republicano a la generación de información estadística, acerca de las comunidades de origen inmigrante (es ilegal preguntar por la etnicidad o la religión de las personas), habría contribuido a ocultar las dificultades de acceso efectivo a los derechos, así como las prácticas discriminatorias sufridas por determinados grupos (particularmente aquellos de origen árabe y subsahariano) en ese país (Simon, 2015). Así, en lugar de abordar dichas desigualdades y sus consecuencias, el debate social y político sobre la inmigración y la diversidad en Francia ha girado fundamentalmente en torno a aspectos identitarios y/o culturales (el papel y la presencia del Islam en una sociedad marcadamente secularizada, el uso del velo islámico en el espacio público, etc.).

El Partido Socialista francés ha actuado tradicionalmente como un firme defensor del modelo republicano (aún a costa de no pres-

tar suficiente atención a las profundas desigualdades socio-económicas que afectaban a las poblaciones de origen inmigrante, o a la escasa visibilidad social y la débil representatividad política de estos colectivos). Esto no le ha ahorrado, sin embargo, la acusación de mantener una actitud de pasividad, o incluso de connivencia con las tendencias “comunitaristas” de determinados grupos de origen inmigrante (en referencia a la propensión hacia el repliegue en la cultura y la religión de origen, particularmente entre los musulmanes, percibida como una amenaza para la cohesión de la sociedad francesa).

En aquellos países que abrazaron el modelo “multiculturalista”, como el Reino Unido, Suecia o los Países Bajos, la aplicación de políticas específicas para grupos de origen inmigrante (definidos como “grupos étnicos minoritarios”) orientadas a reconocer política e institucionalmente la existencia de dichas comunidades y a reducir las desigualdades que les afectan, resultó, en cierto sentido, contraproducente. El riesgo de compartimentalización de estos grupos como consecuencia de su reconocimiento oficial y de la aplicación de programas específicos dirigidos a ellos implicaba enfatizar las diferencias, incrementando así el riesgo potencial de segregación respecto al resto de la sociedad. Esto incrementaba, a su vez, el riesgo de estigmatización de estos colectivos entre determinados sectores de la población autóctona.

Los partidos socialdemócratas fueron firmes defensores de los enfoques “multiculturalistas” en los países en los que se adoptó este modelo, de modo que se encontraron también en primera línea de fuego cuando las críticas a este modelo arreciaron, gene-

ralmente promovidas por partidos conservadores y/o por formaciones políticas de extrema derecha que hicieron del tema del “fracaso de la integración de los inmigrantes” uno de sus ejes centrales de movilización.

En la práctica, todos los modelos de gestión de la diversidad han ofrecido resultados ambiguos en sus objetivos de “integración” para las opiniones públicas de las sociedades de acogida. Esto es en buena medida así, al adquirir particular visibilidad aquellos casos de fracaso relativo (en resultados educativos, integración laboral, etc.), anomia (jóvenes de origen inmigrante asociados a prácticas delictivas, conflictos por usos diferenciados del espacio público, altercados y revueltas en barrios de alta concentración de población de origen inmigrante, etc.), o directamente de alienación respecto a los valores de la sociedad receptora (radicalización islamista y su manifestación más extrema en forma de terrorismo yihadista). Ante estas situaciones, la relativamente exitosa “integración” de la gran mayoría de las poblaciones de origen inmigrante, en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana de sus sociedades de acogida, se convierte en prácticamente invisible, eclipsada por los titulares mediáticos y los eslóganes políticos que hablan del “fracaso del multiculturalismo” (como la Canciller alemana Angela Merkel afirmó en 2010, siendo secundada poco después por el Primer Ministro británico David Cameron), o de los profundos problemas del “modelo francés de integración” (señalados por Nicolas Sarkozy en torno a las mismas fechas).

Los fallos, sin duda existentes, en los procesos de “integración” de las poblaciones de origen inmigrante son, en buena medida, atribuibles a las limitaciones de las políticas

públicas que deberían facilitarla (particularmente desde el sistema educativo, pero también los servicios sociales, o la sanidad), así como a la existencia de prácticas discriminatorias que perpetúan las desigualdades en el acceso a los ámbitos socio-económicos principales,, en los que se debería ejercitar dicha “integración” (el mercado laboral, el de la vivienda, o en la esfera de la representación socio-cultural). Los partidos socialdemócratas tienen en la “integración” de los inmigrantes un complejo reto, consistente en desmontar los mecanismos de “inversión de la carga de la prueba” que responsabilizan a los inmigrantes por los fracasos de las sociedades de acogida en incorporarles, identificando los componentes estructurales que dificultan dicho proceso y planteando soluciones en forma de regulación y de reformas en las políticas públicas afectadas. Estas iniciativas de lucha contra la desigualdad deben además ser desarrolladas en un entorno, en el que amplios sectores de la población autóctona han sido atraídos por mensajes de rechazo a la inmigración, que identifican a estos colectivos como el origen de una multiplicidad de problemas que afectan a las sociedades contemporáneas (desde el desempleo al terrorismo, pasando por la criminalidad, o el deterioro de los servicios públicos).

Populismos y movilización anti-inmigración

A lo largo de las últimas décadas, se han ido produciendo una serie de transformaciones en la esfera política de los países europeos, que han reducido gradualmente la importancia del tradicional eje izquierda-derecha, facilitando la emergencia de otros

clivajes hacia los que se habrían ido desplazando los conflictos de intereses y las articulaciones y movilizaciones socio-políticas en las sociedades europeas.

El primero de estos cambios, vinculado al creciente papel de los valores post-materiales en los posicionamientos normativos e ideológicos de los ciudadanos (ecologismo, pacifismo, etc.), fue atribuido, ya en la década de los 70, a las transformaciones en la estructura social derivadas del incremento general de la renta y del nivel educativo de la población (Inglehart y Welzer, 2005).

A partir de la década de los 80, la creciente movilización de colectivos sociales que hasta la fecha habían ocupado posiciones periféricas, o habían sufrido discriminación (mujeres, minorías étnicas o sexuales, etc.), situó las "políticas de identidad" y las "políticas de presencia" (Phillips, 1998), en un espacio central de la arena política, contribuyendo con ello a una mayor dilución de la tradicional política de clase (Hobsbawm, 1996).

Podemos identificar un tercer momento clave en el debilitamiento del eje tradicional izquierda-derecha, vinculado al crecimiento de partidos populistas durante la última década. La crisis económica sufrida por los países europeos aceleró la visibilidad e influencia de fuerzas políticas caracterizadas por su naturaleza demagógica (plantean respuestas simples a problemas extremadamente complejos) y anti-elitista (aspiran a establecer el principal eje de conflictividad ideológica entre "élite" y "pueblo", en un supuesto eje de conflicto arriba-abajo), así como por sus posicionamientos contrarios a la integración europea y a la globalización (Mudde, 2004). La receptividad

de las diferentes sociedades europeas a la penetración de formaciones populistas ha dependido de las características específicas de estas sociedades, de su historia social y política en las décadas precedentes y, particularmente, de su posicionamiento en el eje deudores-acreedores que ha fracturado a los países de la Unión Europea desde que la crisis económica y financiera golpease al continente europeo.

Los países del sur de Europa, más gravemente afectados por la crisis (significativo incremento de la desigualdad, altísimos niveles de desempleo, elevada precariedad laboral y aplicación de estrictas políticas de consolidación fiscal para afrontar su deuda y déficit público), se han mostrado más receptivos al surgimiento de partidos populistas de "izquierda". Este tipo de formaciones han planteado su programa ideológico básico en torno a la dicotomía "casta" (élite corrupta, entregada a la defensa de los intereses del capital) "gente" ("pueblo" honesto y trabajador que ha pagado las consecuencias de la crisis provocada por el comportamiento depredador de las élites), capitalizando con ello las frustraciones de amplias capas de las clases medias y trabajadoras duramente golpeadas por la crisis.

En los países del centro y norte de Europa, menos afectados por la crisis, el malestar ciudadano ha sido capitalizado por formaciones populistas de derechas con un programa ideológico estructurado en torno a la dicotomía "dentro" (de la comunidad nacional y/o étnica) "fuera" (el "diferente", por extranjero, o por no pertenecer a la comunidad étnica). Estos partidos han movilizado sentimientos nacionalistas, xenófobos y de rechazo hacia la integración europea

de sectores de las clases medias y trabajadoras que se sienten vulnerables y frustradas ante los cambios acarreados por la globalización y el desarrollo tecnológico y que creen en riesgo el bienestar alcanzado por sus sociedades (Rico y Anduiza, 2017). Los partidos nacionalistas y xenófobos no son, por supuesto, ninguna novedad en una Europa que los sufrió en altas dosis durante el pasado siglo, pero tras el fin de la segunda guerra mundial habían pasado a ocupar un lugar relativamente marginal, lastrados por la memoria de los horrores provocados por ellos en las décadas de los 20 y 30 (Bornschier, 2010).

Buena parte de los apoyos electorales perdidos por los partidos socialdemócratas en la última década han ido hacia ambos extremos del espectro populista. En el contexto del presente artículo, particular atención merecen aquellos antiguos votantes socialdemócratas (o de partidos de izquierdas en general) que han pasado a apoyar a formaciones populistas de derechas, generalmente por su capacidad para activar las actitudes de rechazo a la inmigración en esos votantes.

El análisis de este debilitamiento en el apoyo a partidos socialdemócratas ha diferenciado dos perfiles de votantes clave. Por un lado, los votantes de clase media con mayor nivel educativo y más próximos a postulados liberales (receptivos a la defensa de valores post-materiales, favorables a políticas que garanticen derechos individuales, así como a la aplicación de “políticas de identidad” que protejan a las minorías, con actitudes más positivas hacia la globalización de la que en buena medida se benefician tanto económica como culturalmente).

Por otro, los votantes de clase obrera tradicional apegados a valores “comunitarios de izquierda” (preocupados por la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, poco receptivos a consideraciones acerca del medio ambiente, o los derechos de las minorías y reacios ante la globalización de la que no confían beneficiarse) (Elchardus, 2011). El declive de la identidad de clase, experimentado a lo largo de las últimas décadas, habría planteado a los partidos socialdemócratas el dilema de tratar de mantener la fidelidad de ambos electorados, intentando hilvanar complejos equilibrios programáticos de difícil articulación, o bien tirando la toalla y optando por responder fundamentalmente a las demandas de uno de esos grupos, aún a riesgo de perder una parte sustancial del apoyo del otro. En esa tesitura, los partidos socialdemócratas europeos se habrían acercado a sus votantes moderados de clase media, facilitando con ello el desplazamiento de sus electores de clase obrera hacia la abstención, o hacia partidos populistas de izquierdas (si estas formaciones sintonizaban mejor con su rechazo de la globalización capitalista), o de derechas (si se sentían más atraídos por la agenda de seguridad e identidad propuesta por estas formaciones).

Así, los partidos populistas de derechas movilaron tanto las ansiedades frente a los flujos migratorios, como la frustración ante la percepción de fracaso de los modelos de “integración” antes señalados (Modest y de Koning, 2016), proponiendo el repliegue sobre la identidad nacional, así como el cierre de las fronteras para proteger al “pueblo” de la amenaza del extranjero que genera inseguridad (delincuencia, terrorismo) y trata de

apropiarse de los recursos escasos (vivienda, servicios públicos, empleos) que “legítimamente” pertenecen a los miembros de la “comunidad nacional”.

El Estado de Bienestar en cuestión

El Estado de Bienestar constituye uno de los ámbitos de actuación más cuestionados desde sectores contrarios a la intervención pública en la economía y la sociedad. Es también uno de los espacios en los que se concentran los discursos contrarios a la inmigración. Como ámbito de política, central en el programa socialdemócrata, las discusiones acerca de su naturaleza y funcionamiento representan una dimensión clave para el futuro de estas formaciones políticas en las sociedades europeas.

La crisis económica, iniciada hace casi una década, facilitó el surgimiento de un poderoso discurso que enfatizaba la necesidad de reducir el gasto público y expiar los “excesos” de gasto a través de la aplicación de estrictas medidas de austeridad. Las políticas de consolidación fiscal, aplicadas con particular rigor en el ámbito del bienestar, fueron la consecuencia directa de estos planteamientos.

Desde posiciones críticas con la presencia de inmigrantes en las sociedades europeas, se planteaba que el Estado de Bienestar es, a la vez, víctima e inductor del fenómeno migratorio. A partir de una serie de controvertidas afirmaciones no avaladas por evidencia empírica contrastada, pero con un fuerte impacto político potencial (de nuevo, desde planteamientos del “sentido común”), esos enfoques han tratado de capitalizar las actitudes de sospecha hacia la inmigración,

vinculándola con los problemas del Estado de Bienestar. Así, se plantea que el sistema de protección social actuaría como factor de atracción de flujos migratorios no deseados, al incluir los potenciales migrantes las prestaciones sociales que esperarían recibir en la sociedad de acogida, en sus consideraciones previas a iniciar el proyecto migratorio. Esta idea, válida como hipótesis, no ha sido confirmada por ningún estudio de los realizados entre inmigrantes con objeto de dilucidar las motivaciones y consideraciones que guiaron su iniciativa migratoria. Contrariamente a lo que sucede con la disponibilidad de empleos (aspecto determinante en para la decisión de emigrar), el acceso a prestaciones sociales en el país de acogida no aparece entre las principales razones esgrimidas por los migrantes para explicar su decisión de abandonar su país de origen.

Se ha argumentado también que la inmigración “sobrecarga” unos sistemas de protección social que estarían, además, expuestos al “abuso” por parte de estos colectivos. De nuevo, y tomando en consideración que la casuística sobre esta cuestión puede ser amplísima, por las particularidades de cada esquema de protección social en cada país, así como por la pluralidad de perfiles de las poblaciones de origen inmigrante y más allá de los ejemplos anecdóticos sobre los que puedan construirse los argumentos populistas anti-inmigración, los estudios realizados acerca de estas cuestiones no avalan estos planteamientos. Así, el uso del Estado de Bienestar por las poblaciones de origen inmigrante tiende a ser menor que el de las personas autóctonas de igual nivel socio-económico (Moreno Fuentes y Bruquetas Callejo, 2011). Igualmente, los estudios sobre

el balance fiscal de la inmigración muestran que estos grupos son contribuyentes netos durante las primeras fases de su asentamiento en la sociedad de acogida, pasando a tener un impacto generalmente neutro cuando su perfil demográfico converge con el de la población autóctona (Dustmann y Fratini, 2013; OCDE, 2013; Chojnicki et al., 2010;).

El tema del acceso de las poblaciones de origen inmigrante al Estado de Bienestar ha dado también pie a una discusión acerca de los límites de la solidaridad en sociedades crecientemente heterogéneas, en lo que podríamos denominar el debate sobre el “chauvinismo del bienestar”. De acuerdo con este planteamiento, la legitimidad para acceder a las prestaciones del Estado de Bienestar, por parte de la población de origen inmigrante, sería cuestionada por amplios sectores de la población autóctona, en tanto que los inmigrantes no formarían parte de la “comunidad nacional” hacia la que muchos de ellos creen que deberían dirigirse los esfuerzos de solidaridad (Freeman, 2009; Fox, 2004). Los estudios que plantean que en determinadas sociedades, como la norteamericana, la diversidad étnica contribuiría a debilitar la cohesión social y, con ello, la disponibilidad de los ciudadanos a financiar sistemas de protección social y redistribución de la renta (Putnam, 2007), no han sido validados en estudios comparados en países europeos, destacándose la importancia de los equilibrios institucionales en el seno de cada sistema de protección social como elemento clave a la hora de dilucidar el potencial impacto de la diversidad étnica sobre el apoyo ciudadano al Estado de Bienestar (Van der Waal et al., 2013; Kesler and Bloemraad, 2010).

Los partidos socialdemócratas no pueden pasar por alto, sin embargo, que una parte de sus tradicionales votantes de clase obrera creen encontrarse en un contexto de competencia con las poblaciones de origen inmigrante por recursos del bienestar escasos, inmigrantes a los que con frecuencia culpan del deterioro de dichos sistemas de protección social (Legrain, 2011). Más allá de tratar de mostrarles el error en el que incurren en su búsqueda de “chivos expiatorios”, la socialdemocracia debe abordar los problemas que sufre un Estado de Bienestar, sometido a un grave tensionamiento derivado de los “Nuevos Riesgos Sociales” a los que ha de hacer frente con recursos presupuestarios menguantes (del Pino y Rubio, 2016).

La “excepcionalidad” española

España es uno de los pocos países europeos en los que el populismo anti-inmigración no ha cristalizado en un partido político con representación nacional. El hecho de que los datos sobre actitudes hacia la inmigración sitúen a la sociedad española en un relativo buen lugar en el contexto europeo (Cebolla y González, 2016) no significa que estemos definitivamente “vacunados” contra el populismo xenófobo, sino que, hasta la fecha, y por circunstancias coyunturales específicas de la sociedad española, el malestar ciudadano (con la crisis económica y sus consecuencias, así como con la percepción de mal funcionamiento de las instituciones, la globalización, etc.) ha sido canalizado en otras direcciones. Los “empresarios políticos” del populismo de “izquierdas” (en todo el país) y del populismo nacionalista (en el caso particular de Cataluña) han aprovechado la “ventana de oportunidad” planteada por la

crisis para atraerse el apoyo de las clases medias y trabajadoras frustradas en sus expectativas de mejora vital para ellos mismos (en el caso de los jóvenes) y para sus hijos o nietos (en el caso de personas de mayor edad), reduciendo con ello indirectamente el espacio para el desarrollo de partidos populistas anti-inmigración. Existen, lógicamente, otros factores concomitantes (la naturaleza relativamente reciente del asentamiento de poblaciones inmigrantes en España, la escasa habilidad desplegada por este tipo de organizaciones para atraer la atención de los medios y configurar la opinión pública, la debilidad de su liderazgo, etc.) que deben ser tomados también en consideración para dar cuenta de la práctica ausencia de este tipo de formaciones en nuestro país.

El hecho de que no exista un “modelo de integración” homogéneo para el conjunto del país (las competencias sobre esta materia están en manos de las Comunidades Autónomas, que han configurado un mapa heterogéneo de modelos de “integración”) (Zapata y Pinyol, 2008), o políticas públicas explícitas de “multiculturalidad” que puedan ser estigmatizadas, como proporcionando un trato diferenciado a las poblaciones de origen inmigrante, no impide que surjan discursos que denuncien el “trato preferente” proporcionado a los inmigrantes, particularmente en el ámbito de las políticas de bienestar. Así, los partidos de izquierdas han experimentado ya considerables tensiones con una parte de sus bases, tentadas por discursos xenófobos en determinados municipios con porcentajes significativos de población de origen inmigrante (Astor, 2016; Escandell y Ceobanu, 2009). Cambios significativos en la coyuntura socio-política, combinados

con modificaciones en las estrategias de los partidos anti-inmigración, podrían dar pie en el futuro al surgimiento de formaciones populistas de derechas que utilicen esa baza para atraer a tradicionales votantes de izquierdas desencantados.

Migraciones y futuro de la socialdemocracia

La experiencia de los partidos socialdemócratas europeos, en relación a la emergencia de formaciones populistas anti-inmigración y al trasvase de votantes que pasaron a apoyar a estos partidos, constituyen un terreno fértil del que extraer conclusiones aplicables a países donde este tipo de partidos aún no se han establecido.

La inmigración está aquí para quedarse, y en los próximos años seguirán llegando flujos de inmigrantes y refugiados a Europa en busca de oportunidades de futuro de las que carecen en sus países de origen. Las sociedades europeas se encuentran a las puertas de un proceso de decrecimiento demográfico y de acentuado envejecimiento poblacional que hará necesarios dichos flujos. El hecho de que un buen número de sectores del mercado laboral necesiten de esta mano de obra no significa, sin embargo, que la población europea se vaya a mostrar unánimemente favorable a este proceso.

De lo anterior se deduce que va a ser necesario que los partidos socialdemócratas elaboren un discurso complejo y matizado que sea capaz de responder a las necesidades de la economía, sin ignorar por ello las ansiedades de una parte no despreciable de la población (algunos de los cuales fueron votantes suyos en el pasado y podrían no

volver a serlo en el futuro por su rechazo a la inmigración y su disgusto con las políticas de “integración” que perciben como fallidas y de las que hacen responsables a los partidos socialdemócratas).

No se debe ignorar ni estigmatizar la ansiedad que atenaza a buen número de ciudadanos que focalizan en la inmigración su rechazo a un orden de cosas (globalización, cambio tecnológico, etc.) que trastoca sus vidas, que no alcanzan a comprender plenamente y que creen escapa a su control. La transformación en ciernes en nuestras sociedades es profunda, y el retorno al crecimiento económico (aunque se produjera de manera razonablemente sostenida) no diluirá por sí solo dichas ansiedades ya que su base va más allá de la dimensión estrictamente económica (Glavey, 2017).

Los partidos socialdemócratas no deben banalizar la importancia del surgimiento de formaciones políticas que movilicen las actitudes anti-inmigrantes de una parte de la población, ni tampoco pensar que la división del voto a la derecha resultante del surgimiento de este tipo de partidos pudiera resultarles electoralmente rentable en el corto plazo. El desplazamiento del debate hacia los argumentos planteados por este tipo de formaciones termina reconfigurando el conjunto del escenario político, normalizando la xenofobia y arrinconando a los partidos que tratan de mostrar una imagen compleja de la realidad migratoria y de su impacto en la sociedad receptora.

De igual modo, los partidos socialdemócratas no pueden, lógicamente, incorporar elementos de la narrativa anti-inmigrante con objeto de tratar de retener a algunos de esos antiguos votantes tentados por dichos

discursos. Ignorar los problemas que puedan derivarse de la inmigración tampoco es una opción si se aspira a evitar la imagen de partidos desconectados de la realidad de los votantes de clase trabajadora que conviven con las poblaciones de origen inmigrante en el territorio. Internalizar y reconocer públicamente dichos problemas allá donde surjan, sin por ello secundar los discursos de “identidad y seguridad” propuestos por los partidos populistas de derechas, constituye el difícil equilibrio a alcanzar por los partidos progresistas (Ravik, 2013).

La clave está en incardinar la defensa de los aspectos positivos derivados de la inmigración con un discurso de blindaje de los derechos sociales y de reforzamiento del Estado de Bienestar desde una lógica de igualdad de todos los ciudadanos. La educación y el mercado de trabajo constituyen dos de los mecanismos de integración más potentes para las poblaciones de origen inmigrante. La propuesta política socialdemócrata debe incidir de manera particular en estas dimensiones, de modo que los inmigrantes vean respondidas sus reclamaciones de igualdad, al tiempo que el conjunto de la población pueda ser consciente de la aportación positiva de la migración a su sociedad de acogida.

El reconocimiento y la protección de las minorías deben ir acompañados de un discurso en el que se enfaticen los espacios comunes que articulan una sociedad cohesionada en su diversidad. El respeto a la identidad debe venir acompañado de un marcado énfasis en los aspectos compartidos, evitando la “esencialización” de la diferencia, y permitiendo así a las personas de origen inmigrante sentirse respetadas, sin quedar por

ello encasilladas en una adscripción étnica impuesta desde el exterior (Jurado, 2011). En la construcción de una narrativa de nacionalismo inclusivo que reconozca la diversidad de nuestras sociedades (Antonsich et al., 2017), promulgue la igualdad de dere-

chos y defienda el Estado de bienestar reside la compleja fórmula que debería permitir a los partidos socialdemócratas salir reforzados de los retos planteados por la creciente diversidad generada por la inmigración.

NOTAS

¹ Este artículo ha sido redactado durante el desarrollo del proyecto PRASINIE (*Políticas de regulación del acceso a la sanidad de los inmigrantes irregulares en España*, Plan Nacional de I+D, CSO2013-44717-R).

BIBLIOGRAFÍA

Antonsich, M., Mavroudi, E. y Mihelj, S. (2017). Building inclusive nations in the age of migration. *Identities* 24(2): 156-176.

Astor, A. (2016). Social Position and Place-Protective Action in a New Immigration Context: Understanding Anti-Mosque Campaigns in Catalonia. *International Migration Review* 50(1): 95-132.

Bertossi, C., Duyvendak, J. and Schain, M. (2012). The Problems with National Models of Integration: A Franco-Dutch comparison, *Special Edition Comparative European Politics*, 10 (3).

Castles, S. (2004). Why Migration Policies Fail. *Ethnic and Racial Studies* 27(2): 205-227.

Cebolla Boado, H. y González Ferrer, A. (2016). ¿Ha podido más la crisis o la convivencia? Sobre las actitudes de los españoles ante la inmigración. Madrid: Fundación Alternativas, Documento de trabajo 191/2016.

Bornschier, S. (2010). *Cleavage Politics and the Populist Right: The New Cultural Conflict in Western Europe*. Philadelphia: Temple University Press.

Chojnicki, X., Defoort, C., Drapier, C., Ragot, L. y Rapoport, H. (2010). *Migrations et protection sociale : Étude sur les liens et les impacts de court et long terme*. Paris: DREES-MiRe. https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://droit.univ-lille2.fr/uploads/media/Rapport_Drees_EQUIPPE_V3_02.pdf

Dustmann, C. y Frattini, T. (2013). *The Fiscal Effects of Immigration to the UK*. London: Centre for Research and Analysis of Migration, Department of Economics, University College London. http://www.creammigration.org/publ_uploads/CDP_22_13.pdf

Elchardus, M. (2011). An electorate set free: culture, symbolism and social democracy, in *Exploring the cultural challenges to social democracy*. London: Policy Network.

- Escandell, X., y Ceobanu, A. (2009). When contact with immigrants matters: threat, interethnic attitudes and foreigner exclusionism in Spain's Comunidades Autonomas. *Ethnic and Racial Studies* 32(1): 44-69.
- Favell, A. (1998). *Philosophies of Integration. Immigration and the Ideal of Citizenship in France and Britain*. London: Macmillan.
- Fox, C. (2004). The Changing Color of Welfare? How Whites' Attitudes Toward Latinos Influence Support for the Welfare State. *American Journal of Sociology* 110: 580-625.
- Glavey, M. (2017). *New Migration Realities. Inclusive Narratives*, Policy Network, London 2011.
- Hobsbawm, E. (1996). "Identity Politics and the Left". 1996 Trust Lecture. Barry Amiel and Norman Melburn Trust. <http://banmarchive.org.uk/articles/1996%20annual%20lecture.htm>
- Jurado, E. (2011). Progressive multiculturalism: a social democratic response to cultural diversity?, in *Exploring the cultural challenges to social democracy*. London: Policy Network.
- Kesler, C. y Bloemraad, I. (2010). Does Immigration Erode Social Capital? The Conditional Effects of Immigration-Generated Diversity on Trust, Membership, and Political Participation Across 19 Countries. *Canadian Journal of Political Science* 43(2): 319-347.
- Inglehart, R. y Welzel, C. (2005), *Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence*, New York: Cambridge University Press.
- Legrain, P. (2011). Progressives should embrace diversity, in *Exploring the cultural challenges to social democracy*. London: Policy Network.
- Modest, W. y de Koning, A. (2016). Anxious politics in the European city. *Patterns of Prejudice*, 50(2): 97-108.
- Moreno Fuentes, F.J. y Bruquetas Callejo, M. (2011). *Inmigración y Estado de bienestar en España*. Barcelona: Colección de Estudios Sociales de 'La Caixa' nº 31.
- Mudde, C. (2004). The Populist Zeitgeist, *Government and Opposition* 39(4): 541-563.
- OCDE (2013). *Perspectives des migrations internationales 2013. L'impact fiscal de l'immigration dans les pays de l'OCDE*. Paris : OCDE.
- Peri, G. (2014). Do immigrant workers depress the wages of native workers? IZA Working Papers. <https://wol.iza.org/articles/do-immigrant-workers-depress-the-wages-of-native-workers/long>
- Phillips, A. (1998). *The Politics of Presence*. Oxford : Oxford U. Press.
- del Pino Matute, E. y Rubio Lara, M. J. (2016). *Los Estados de Bienestar en la encrucijada: políticas sociales en perspectiva comparada*. Madrid: Tecnos.
- Putnam, R. (2007). E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first century. *Scandinavian Political Studies* 30 (2): 137-174.
- Ravik Jupskås, A. (2013). *The electoral rise of populism in the Nordic countries*. London: Policy Network. http://www.policy-network.net/pno_detail.aspx?ID=4326&title=The-electoral-rise-of-populism-in-the-Nordic-countries
- Rico, G. y Anduiza, E. (2017). *Economic Correlates of Populist Attitudes: An Analysis of Nine European Countries in the Wake of the Great Recession* http://158.109.137.58/wp5/wp-content/uploads/2016/10/livewhat_pop_v6_all_nf.pdf

Rutter, J. y Latorre, M. (2009). Social housing allocation and immigrant communities. London: Equality and Human Rights Commission. http://www.better-housing.org.uk/sites/default/files/consultations/responses/4_social_housing_allocation_and_immigrant_communities.pdf

Simon, P. (2015). L'intégration segmentée : citoyenneté, mixité et mobilité sociale, *Cahiers Français*, 385, 1-7.

De Zwart, F. (2005). The dilemma of recognition: administrative categories and cultural diversity. *Theory and Society*, 34, 137-169.

Van der Waal, J., De Koster, W. y Van Oorschot, W. (2013). Three Worlds of Welfare Chauvinism? How Welfare Regimes Affect Support for Distributing Welfare to Immigrants in Europe. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice* 15(2): 164–181.

Wieviorka, M. (2009). Naissance et déclin du débat sur le multiculturalisme, in Michel Seymour, *La Reconnaissance dans tous ses états*. Montréal: Edition Québec Amérique.

Zapata-Barrero, R. y Pinyol, G. (eds.) (2008). *Los gestores del proceso de inmigración. Actores y redes de actores en España y Europa*. Barcelona: CIDOB.